

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



**“LA INAPLICANCIA DEL NON BIS IN ÍDEM EN LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY 2016”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
ABOGADO**

TESISTA : Bach. Jhonatan Ramírez Portilla

ASESOR : Dr. Felix Ponce e Ingunza

HUÁNUCO – PERÚ
FEBRERO 2017

**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

En la ciudad de Huánuco, siendo las 10.00 horas del día 01 del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en el Salón del Auditorio Principal los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N° 185-2017-DCATP -UDH del 20 de noviembre de 2017, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis del Graduado **Jhonatan RAMÍREZ PORTILA** el postulante al Título de Abogado, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

JURADOS CALIFICADORES

PUNTAJE

Abg. Hugo Peralta Baca Presidente

Abg. Hugo Vidal Romero Secretario

Abg. Eduardo Lavado Iglesias Vocal

13
13
13


CALIFICATIVO :


13
En números

trece
En letras

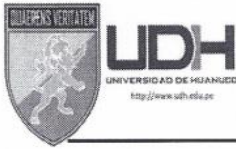
RESULTADO

aprobado por unanimidad


Abg. Hugo Peralta Baca
Presidente


Abg. Hugo Vidal Romero
Secretario


Abg. Eduardo Lavado Iglesias
Vocal



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 185-2017-DCATP-UDH
Huánuco, 20 de noviembre de 2017

Visto la Resolución N° 164-2017-DCATP-UDH de fecha 24 de octubre de 2017 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **“LA INAPLICANCIA DEL NOM BIS IN ÍDEM EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY 2016”**, presentado por el Bachiller **Jhonatan RAMÍREZ PORTILLA**;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 12° del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

Que, mediante Resolución N°:587-2015-R-CU-UDH de fecha 29 de mayo de año 2015 se aprobó el ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante oficio de fecha 11 de noviembre de 2017, el Mg. Felix Ponce e Ingunza Asesor del Proyecto de Investigación **“LA INAPLICANCIA DEL NOM BIS IN ÍDEM EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY 2016”**, *aprueba el informe final de la Investigación;*

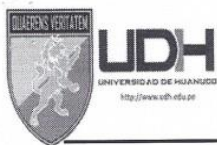
Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo el Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 316-2013-R-CU-UDH del 25 de abril de 2013 y la facultad contemplada en la Res. N° 571-2013-R-UDH;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Jurado Calificador para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, Bachiller **jhonatan RAMÍREZ PORTILLA**, para obtener el Título Profesional de **ABOGADO** por la modalidad de ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional; a los siguientes docentes:

Abg. Hugo Peralta Baca	: Presidente
Abg. Hugo Vidal Romero	: Secretario
Abg. Eduardo Lavado Iglesias	: Vocal



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 185-2017-DCATP-UDH
Huánuco, 20 de noviembre de 2017

Artículo Segundo.- Señalar el día viernes 01 de diciembre de 2017 a horas 10:00 a.m. dicha Sustentación, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Uladislao Zavallos Acosta Dr. D.
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ING. FERNANDO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DEL CATP

DISTRIBUCIÓN: Vice. Rect. Académico, Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad..f. Exp. Interesado, archivo

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico a mis hijas.

AGRADECIMIENTO

- A nuestro señor Jesucristo por ayudarme alcanzar todas mis metas profesionales día a día.
- A mis padres, por haber confiado siempre en mí y por ser mi apoyo para seguir adelante.
- Al Dr. Félix Ponce e Ingunza por brindarme su apoyo incondicional.
- A todas las instituciones que me brindaron la información pertinente para lograr el propósito encomendado en la presente investigación.

El Autor

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito dar a conocer un principio importante dentro de la esfera del Derecho Administrativo, pues en la injerencia de los delimitados procesos que se pudo apreciar que puede ver una vaga aplicación del Principio del Non Bis In Idem, en los procesos internos y externos donde la Municipalidad de Huayllay interviene.

No cabe duda que a lo largo de la presente investigación desarrollaremos como debe ser la adecuada aplicación del principio del Non Bis in Idem, en los procesos administrativos, y teniendo en cuenta que el delimitado principio nace a raíz del procedimiento administrativo sancionador, no cabe duda que a lo largo de los delimitados apartes se puede comprender los criterios delimitadores para la aplicación en los procesos administrativos.

La presente investigación tendrá que desarrollarse en delimitados capítulos, en ellos se realizará toda la observación a los criterios donde tiene lugar y el origen de los delimitados apartes del derecho administrativo, no cabe duda que la Ley de Procedimiento administrativo estará en juego en la presente investigación y ello ayudará a esclarecer el espacio y tiempo de la presente investigación.

Asimismo, se tiene que velar por la correcta aplicación o la incorrecta aplicación del principio del Non Bis in Idem, cabe señalar que con la delimitación de los cuerpos normativos se tiene por claro que los ámbitos de competencias son de distinta manera en el Derecho Administrativo que en el Derecho Penal, pues siempre hay una confusión cuando se habla del principio del Non Bis in Idem, pues en el derecho penal tiene otro aforismo y tiene otro fundamento, no cabe duda que la presente investigación

tarta de esclarecer los ámbitos de competencias en las circunstancias que lo adopte el Derecho Administrativo y dentro de ello el procedimiento administrativo sancionador y los cuerpos normativos que tienen relevancia con la presente investigación.

SUMMARY

The present investigation has as purpose to make an important principle within the sphere of Administrative Law, as in the interference of the delimited processes that could be appreciated that you can see a vague application of the Principle of Non Bis In Idem, in internal and external processes where the municipality of Huayllay intervenes.

There is no doubt that throughout this investigation we will develop as it should be the adequate application of the principle of non bis in idem, in administrative processes, and taking into account that the delimited principle is born to rain of the administrative penalty procedure, there is no doubt that along the delimited to portes can understand the criteria delimiters for the application in the administrative processes.

This research will be developed in delimited chapters, they all will be the observation to the criteria where it takes place and the origin of the delimited to portes of administrative law, there is no doubt ar5 The Law of Administrative Procedure will be in play in the present investigation and this will help to clarify the space and time of the present investigation.

It also has to ensure the correct application or incorrect application of the principle of non bis in idem, it should be noted that with the delimitation of the bodies of law is clear that the areas of competence are in different ways in the Administrative Law in the Criminal Law, Since there is always a confusion when speaking of the principle of non bis in idem, as in the criminal law has another aphorism and has another basis, there is no doubt that the present investigation cake to clarify the areas of responsibility in the circumstances which adopt the Administrative Law and within the procedure of administrative penalty and the bodies that are relevant to the present investigation.

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación, tiene como limites el estudio de una principio regulador por el Derecho Administrativo y Derecho Penal, cabe señalar que cada rama lo estudia de manera clara y precisa teniendo en cuenta sus naturaleza y su fin, es por ello nos en marcamos dentro del ámbito de competencia de la Municipalidad de Huayllay, lugar donde encontramos diversas problemáticas entorno al problema planteado y no cabe duda que tendrá un larga connotación a nivel de cada problema analizado y cada hipótesis validado en la presente investigación.

No cabe dudad que una dentro de la población delimitaremos a una población entre administrados dentro de la Municipalidad de Huayllay, asimismo, tendremos un panorama del desarrollo del derecho administrativo, cabe precisar que dentro de ello connotaremos la importancia del derecho penal, pues de ellos sale una connotación de los derivados de la ciencia y de la presente investigación.

Cabe señalar que los ámbitos de competencias de cada uno de ellos se regirán por la forma de la obtención de cada resultado que se trabajó en la presente investigación, a raíz de las problemáticas al momento de interpretar en Non Bis In Idem, ello dará lugar a determinadas conclusiones con la cuales determinaremos la investigación señala.

La presente investigación tendrá se desarrollara en delimitados capítulos, en ellos se realizará toda la observación a los criterios donde tiene lugar y el origen de los delimitados a portes del derecho administrativo, no cabe duda que la Ley de Procedimiento administrativo estará en juego en la presente investigación y ello ayudara a esclarecer el espacio y tiempo de la presente investigación.

Asimismo, se tiene que velar por la correcta aplicación o la incorrecta aplicación del principio del Non Bis in Idem, cabe señalar que con la delimitación de los cuerpos

normativos se tiene por claro que los ámbitos de competencias son de distinta manera en el Derecho Administrativo que en el Derecho Penal, pues siempre hay una confusión cuando se habla del principio del Non Bis in Idem, pues en el derecho penal tiene otro aforismo y tiene otro fundamento, no cabe duda que la presente investigación trata de esclarecer los ámbitos de competencias en las circunstancias que lo adopte el Derecho Administrativo y dentro de ello el procedimiento administrativo sancionador y los cuerpos normativos que tienen relevancia con la presente investigación.

El Autor

INDICE

Dedicatoria	2
Agradecimiento	3
Resumen	4
Summary	6
Introducción	7
CAPITULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1. Descripción del Problema	11
1.2. Formulación del Problema	13
1.2.1. Problema General	13
1.2.2. Problemas Específicos	13
1.3. Objetivos	14
1.3.1. Objetivo General	14
1.3.2. Objetivos Específicos	14
1.4. Justificación de la Investigación	14
1.5. Limitaciones de la Investigación	14
1.6. Viabilidad de la Investigación	15
CAPITULO II MARCO TEÓRICO	
2.1. Antecedentes de la Investigación	16
2.2. Bases Teóricas	29
2.3. Definiciones Conceptuales	29
2.4. Hipótesis	42
2.4.1. Hipótesis General	42
2.4.2. Hipótesis Específicas	42
2.5. Variables	42
2.6. Operacionalización de Variables	43
CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS	
3.1. Método y Diseño	44
3.1.1. Método de la Investigación	44
3.1.2. Diseño de la Investigación	44

3.2. Tipo y Nivel de Investigación	44
3.2.1. Tipo de Investigación	45
3.2.2. Nivel de Investigación	45
3.3. Población y Muestra	45
3.3.1. Población	46
3.3.2. Muestra	46
3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación	46
CAPITULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
4.1. Presentación, Análisis e Interpretación	48
CAPITULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
1. contrastación y valides de resultados	59
CONCLUSIONES	61
RECOMENDACIONES	63
BIBLIOGRAFIA	64
ANEXOS	68

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se llega a entender que el principio Nom Bis In Idem, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujetos, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, y es ahí donde surge problemas, ya que la municipalidad de HAYLLAY no toma en cuenta este importante principio, dado que no existe una comunicación adecuada con las otras entidades públicas como lo son por ejemplo el Ministerio Publico, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entre otras.

Como se sabe no puede haber duplicidad de sanciones por un mismo hecho, en consecuencia si se es sancionado con una multa en el Ministerio Publico, por una falta muy grave regulado en la ley 27181 “Ley general de Transporte y Tránsito Terrestre”, no cabe agregarle una multa adicional por la misma falta en beneficio de la municipalidad; si bien este principio resulta ser sencillo de comprender, no resulta ser sencillo exigirlo, ya que la municipalidad de Huayllay se beneficia con cobros de multas o sanciones de sus empleados y del público contribuyente en la municipalidad de Huayllay.

De acuerdo a ello, el Nom Bis In Idem, no permite la acumulación de sanciones contra el individuo, porque de ser así, se estaría vulnerado el Principio de Tipicidad que es fundamental para la aplicación del derecho administrativo sancionador, de tal forma

cuando la autoridad administrativa se encuentra con esta dualidad, debería aplicar el Principio antes señalado porque se presentan dos supuestos. El primero cuando el órgano jurisdiccional impuso una pena privativa de libertad a un sujeto con la consiguiente pena accesoria o limitativa de derecho; y el segundo está referido a la declaración de sobreseimiento en el proceso penal, es decir, cuando no exista una sanción punitiva y menos aún, una limitativa de derechos. En ambos casos la autoridad administrativa deberá acatar lo ordenado por el órgano jurisdiccional.

En el primer supuesto, la autoridad administrativa se limitará a hacer cumplir la sanción judicial impuesta contra el sujeto, absteniéndose de imponer otra sanción administrativa que se base en los mismos hechos; en el segundo supuesto, al haber sido declarado sobreseído el proceso y al no existir sanción penal, ni limitativa de derechos, la autoridad administrativa no puede aplicar sanción alguna, porque el órgano jurisdiccional ha establecido la inexistencia de responsabilidad penal, por lo tanto al no existir la imposición de una pena principal, la pena accesoria tampoco puede ser impuesta.

En caso, se imponga una sanción administrativa por los mismos hechos, se estará infringiendo el carácter vinculante que tiene una resolución judicial firme en un procedimiento administrativo sancionador, según lo establecido en el artículo 234° inciso 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que se aplica supletoriamente cuando las entidades administrativas no cuentan con un procedimiento propio.

Si bien la concurrencia de diversas faltas, presupone aplicable la sanción de mayor gravedad, esto implica que el administrado es sancionado por la falta más grave que cometa; Sin embargo, el principio Non bis in Idem supone una colisión de dos Leyes sobre un mismo hecho que puede ser sancionado por ambas, cuya concurrencia de normas es posible que sea total o parcial, la cual en la municipalidad existen diversidad de sanciones, ya sea oneroso o suspensiones.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son las Implicancias del Nom Bis In Idem en los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS

- ¿Cómo las implicancias del Nom Bis In Idem lesiona los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay?
- ¿Qué efectos tiene las implicancias del Nom Bis In Idem en los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

- Identificar las Implicancias del Nom Bis In Idem en los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar cómo las implicancias del Nom Bis In Idem lesiona los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay.
- Determinar los efectos que tienen las implicancias del Nom Bis In Idem en los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene como finalidad establecer cuáles son las Implicancias del Nom Bis In Idem en los procesos Administrativos en la Municipalidad de Huayllay, en la cual se llegará a identificar y darle una posible solución, encontrando prontas soluciones, estrategias y dar respuestas a interrogantes.

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La siguiente investigación no tiene limitación ya que se cuenta con antecedentes que se tienen sobre el tema investigado. La búsqueda de libros se llegó a encontrar suficiente información dado que es un principio primordial e importante.

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación es viable debido a que:

a. Técnica

Nos permitió contar con técnicas, tácticas, instrumentos, herramientas, métodos, procedimientos, metodología y asesoramiento profesional, para

poder enfocar el presente proceso de investigación sobre las variables de estudio

b. Económica

- Nos permitió disponer de los recursos materiales y económicos necesarios, para poder sufragar los egresos y asumir los esfuerzos que demandada el desarrollo de la presente investigación
- Nos permitió responder a la demanda social de las víctimas de los accidentes de tránsito y las causas para su comisión, los mismos que exigen su comisión dentro de las normas legales

c. Personal

Por las competencias, capacidades y experiencias de la investigación por ser alumno de esta prestigiosa casa superior de estudios y por la experiencia profesional de los docentes de esta Universidad.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A NIVEL INTERNACIONAL:

- **EL "NON BIS IDEM" EN EL ÁMBITO SANCIONADOR: ESTUDIO COMPARADO DE LOS SISTEMAS ESPAÑOL Y MEXICANO**
- Memoria para optar el grado de doctor en la Universidad Complutense en Madrid.
- Presentado por: HERNÁNDEZ MENDOZA, Liliana.

Llego a la siguiente conclusión:

- La potestad sancionadora de los poderes públicos está atribuida actualmente tanto en México como en España no sólo a los Jueces y Magistrados integrantes del poder Judicial, sino también a las distintas Administraciones Públicas. Este sistema represor de naturaleza mixta fue reconocido expresamente por el artículo 25.1 de la Constitución Española, que rodea a la potestad sancionadora de la Administración de importantes garantías materiales y formales. Dentro de tales garantías no aparece recocida de forma expresa el non bis in idem, pero el Tribunal Constitucional pronto la reconoció como una garantía implícita en el propio art. 25 de la CE. Aunque son muchos los estudios realizados sobre el tema, aún quedan cuestiones abiertas sin resolver que justifican mi estudio detenido sobre el tema. El non bis in idem material, tanto en México como en España, es entendido como la prohibición del doble castigo por lo mismo, es decir, un sujeto no puede ser sancionado dos o más veces por el mismo hecho, sujeto y fundamento. En ambos países se encuentra estipulado de forma

explícita o implícita en las respectivas Constituciones, aunque en España sólo implica el reconocimiento en su vertiente material pero no procedimental, ya que se refiere a sanciones y no al procedimiento de imposición de las mismas.

- Respecto de su naturaleza, es un principio general, en el sentido de carácter informador del ordenamiento jurídico, así como establece criterios para interpretar y aplicar las normas escritas. Pero, a su vez, también contiene reglas jurídicas respecto de la vertiente material y procesal. En cuanto al fundamento del non bis in idem, éste se encuentra en la conjugación de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que conjugados entre sí representan el valor justicia.
- El ámbito de aplicación del non bis in idem material en España y México lo conforma la triple identidad. La primera de ellas comprende, tanto a las personas físicas como jurídicas; a estas últimas hasta hace poco tiempo no se les podía sancionar en materia penal debido a que no podían delinquir ni ser penadas, pero ahora con la reforma realizada al Código penal se admite la sanción a personas jurídicas. En cambio, México continúa con el principio “societas delinquere non potest”. La segunda de las identidades corresponde a los hechos, estos deben entenderse desde el punto de vista jurídico y, por último, el fundamento debe identificarse con la identidad de bien jurídico o interés protegido establecido en las normas. Respecto de las

relaciones de sujeción especial entran las de régimen disciplinario, en ambas no procede aplicar el non bis in idem porque los bienes jurídicos a proteger son diferentes. En México sucede lo mismo, específicamente, en el régimen disciplinario, sólo que en algunos Estados se les impone la responsabilidad disciplinaria a los ex servidores públicos por faltar a su deber mientras se encontraban en el cargo.

- El non bis in idem se conecta con el concurso de normas y sus reglas de resolución, pero es algo ajeno al concurso de infracciones. Las reglas de resolución del conflicto de normas se establecieron en el ámbito penal ante la necesidad de resolver qué norma debe ser aplicable cuando un solo hecho se encuentre tipificado en varios preceptos penales y solo uno de ellos se ha de aplicar. Las reglas a las que me refiero son las establecidas en el artículo 8 Código penal y que también se han adoptado aunque no de forma generalizada cuando se esté ante un concurso de normas administrativas sancionadoras, donde también aplica el non bis in idem, cuya finalidad es evitar el doble castigo. Cuestión diferente es el concurso de infracciones en el que no se aplica el non bis in idem al no concurrir la triple identidad que se exige para su aplicación, ya que siempre faltará la identidad de hecho (concurso real) o la identidad de fundamento (concurso ideal). Lo que sí se aplicaría, en su caso, sería una sanción proporcionada.

- Se ha considerado erróneamente que la prevalencia de la vía penal y la resultante suspensión del procedimiento sancionador constituyen la vertiente procesal del non bis in idem, cuestión que no es así, porque el non bis in idem procesal corresponde a la prohibición de no sufrir dos enjuiciamientos sucesivos. Sin embargo, el “mal llamado non bis in idem procesal” sí tiene una estrecha conexión con el non bis in idem, pues son reglas o instrumentos que ayudan a garantizar dicho principio.
- El problema de la suspensión del procedimiento administrativo sancionador es que no se establece el momento en que la Administración paralice dicho procedimiento, resultando un tanto confuso, pues los tribunales y algunas leyes piden la suspensión del procedimiento al momento previo de dictar resolución, pero resulta más benéfico para el procesado que la Administración suspenda el procedimiento en el momento en que se dé cuenta de que se está llevando a cabo otro procedimiento penal por las mismas causas y, así evitarle al procesado un doble procedimiento simultáneo. También, dicha suspensión se realizará independientemente de si existe o no la triple identidad, pues es suficiente con que existan indicios de delito por hechos cuya separación de los sancionables sea racionalmente imposible su separación.
- Los supuestos en que la Administración no suspenda el procedimiento sancionador se incurrirá en nulidad de pleno derecho, según lo

establecido en la LRJPAC. Dicha nulidad será no solo de la resolución administrativa sino de todo lo actuado por la Administración desde el momento en que se debió realizar la paralización del procedimiento sancionador. Respecto de la retroacción de actuaciones, en algunas ocasiones, puede convertirse en una carga para el acusado más cuando es por vicios formales imputables a la Administración, lo que conlleva como consecuencia prolongar de forma indefinida una situación de inseguridad jurídica, añadiendo a ello la injusticia para el procesado.

- En los casos en que la Administración no respete la suspensión del procedimiento administrativo sancionador y dicte resolución por hechos que pueden ser constitutivos de delito y, aún más, cuando dicha sanción ya se ejecutó, el Tribunal Constitucional adopta dos posturas. La primera en la sentencia 177/1999, de 11 de octubre, en la cual no se respetó la prevalencia de la vía penal y, en la segunda se respetó dicha prevalencia y se adopta la compensación de castigos como una solución para resolver la prohibición del doble castigo. Pero esta solución no resuelve la prohibición enjuiciamientos sucesivos. Ahora bien, si la sanción administrativa ha sido confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, en este caso la jurisdicción penal ya no podrá iniciar el proceso ni continuarlo si se trata de concurrencia de sujeto, hecho y fundamento, ya que se encontrarían ante un conflicto de competencias entre el orden penal y la jurisdicción

contenciosa-administrativa. Al que le correspondería resolver dicho conflicto sería la Sala Especial del Tribunal supremo.

- Los supuestos en que la Administración puede o no continuar con el procedimiento sancionador dependen del tipo de resolución en la vía penal, es decir, si es absolutoria o de condena. Si la sentencia es absolutoria, los supuestos son: cuando no se aprecia la existencia de un ilícito penal, cuando los hechos no sean constitutivos de delito, o cuando aparezcan exentos de responsabilidad penal criminal los procesados, en estos casos nada impide que la Administración inicie o continúe con el procedimiento sancionador, excepto en este último cuando el hecho típico no es antijurídico se analizará si la falta puede apreciarse o no en el ámbito administrativo sancionador. Cuestión diferente en una sentencia condenatoria que vincula a la Administración, en este supuesto no se podrá continuar o iniciar el expediente administrativo sancionador.
- La prohibición de enjuiciamientos sucesivos establece el derecho a no ser juzgado más de una vez por el mismo ilícito, con independencia de que la resolución sea condenatoria o absolutoria. Dicha prohibición es clara en el aspecto procesal penal, ya que rige la cosa juzgada, pues prohíbe que haya un posterior proceso una vez que se dé sentencia absolutoria o de condena. Aunque en el ámbito administrativo sancionador las normas no establecen la prohibición de enjuiciamientos sucesivos también aplica para esta rama del Derecho.

- Desde el punto de vista procesal la Administración puede continuar o iniciar el procedimiento sancionador, siempre que el primer proceso penal haya concluido con sentencia absolutoria y se respete la declaración de hechos probados de la resolución judicial. En este supuesto no se infringe el non bis in idem procesal, ya que el juez penal resuelve por completo sobre la responsabilidad penal, pero no puede resolver sobre las infracciones administrativas que no le competen. De igual forma, los supuestos en que se dé un proceso penal tras una resolución firme del procedimiento administrativo sancionador, es decir, si la resolución firme del procedimiento administrativo sólo implica la infracción administrativa no se vulnera el doble enjuiciamiento puesto que no se resuelve sobre la causa penal. Cuestión diferente es que se vulneré la prevalencia del procedimiento penal y a consecuencia de ello se procede a la anulación del procedimiento administrativo sancionador con su respectiva sanción anticipada.
- Ahora bien, cuando entre dos órganos administrativos sancionadores se esté tramitando de forma simultánea dos procedimientos por el mismo hecho, uno de ellos se tendrá que inhibir por entender que no le corresponde a él la competencia sino a otro diferente, en el supuesto de que los dos órganos se consideren competentes se remitirá al superior jerárquico común para que resuelva. También los interesados pueden pedir la declinación del órgano que se considera

competente, así como pedir que el órgano competente reclame la competencia que por Ley le pertenece

- Los supuestos de procedimientos administrativos sancionadores de forma sucesiva también se encuentran prohibidos por el non bis in idem. En estos supuestos, cuando el primer procedimiento haya concluido con resolución absolutoria o de condena, no se podrá incoar un nuevo procedimiento sancionador por el mismo sujeto, hecho y fundamento, pues es enjuiciar y valorar desde el punto de vista jurídico lo mismo. A menos de que existan algunas circunstancias que pueden dar lugar a un segundo procedimiento sancionador, como son: Una vez concluido el procedimiento sancionador con absolución o condena se encuentren, posteriormente, elementos que no fueron valorados en el primer procedimiento; por ser hechos diferente o; en su caso, cuando se tramita un segundo procedimiento para anular la resolución del primero.
- En los casos en que se tramite de forma simultánea los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos, el procesado puede solicitar la suspensión del procedimiento administrativo. Si la Administración ya dictó sentencia, el Tribunal Contencioso-Administrativo tiene competencia para anular no sólo el procedimiento administrativo sino también la resolución previa, constrañendo a la Administración a revocarla para evitar la vulneración del non bis in idem. Respecto de los procesos contencioso-

administrativos se puede optar por la figura de la litispendencia, cuya finalidad es impedir a las partes el planteamiento de sucesivos procesos sobre el mismo objeto de litigio o, en todo caso, puede aplicarse el instituto de la cosa juzgada. Respecto a México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 23 la prohibición de enjuiciamientos sucesivos. Las instancias referidas en el mencionado artículo no deben interpretarse como enjuiciamientos sucesivos, pues no hay juicios nuevos sino que en realidad son sólo nuevos estadios que son parte de un proceso.

A NIVEL NACIONAL

1. “EL PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM ANALIZADO EN TORNO A LA DIFERENCIA ENTRE EL INJUSTO PENAL E INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: BUSCANDO SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD DE FUNDAMENTO”

- Tesis para optar el título de abogado en la Universidad de Piura.
- Del Bachiller: CHINGUEL RIVERA, Alejandro.

Llego a la siguiente conclusión:

- El fundamento general de la prohibición de bis in idem es la seguridad jurídica. Sin embargo, este fundamento general se concreta y proyecta en otros principios para abarcar las distintas manifestaciones que conlleva una situación de imposición múltiple. De esta manera, mientras que el fundamento concreto de la vertiente material es el principio de proporcionalidad, el de la vertiente procesal lo será el de tutela judicial efectiva.

- La prohibición de bis in idem se trata del derecho fundamental a no ser sancionado ni procesado de manera múltiple por lo mismo. Es un derecho fundamental, por tanto, un principio general del ordenamiento jurídico, pues en su esencia lleva intrínsecamente el valor justicia. De esta manera, gracias a su estructura abierta y genérica, concreta las exigencias de justicia en aquellos casos donde se quiera procesar o sancionar múltiples veces por lo mismo. Así, se evita la instrumentalización de la persona humana y se asegura la protección de su dignidad.
- Tanto el Derecho penal como el Derecho penal económico cumplen la misma función social: mantener las expectativas normativas de conducta derivadas de la identidad normativa de la sociedad. De esta manera, se asume un concepto normativo del bien jurídico – penal y su defraudación dándole un alcance distinto al principio de lesividad.
- La función del Derecho administrativo sancionador puede explicarse mediante una interpretación sistemática de la teoría del ius puniendi estatal con la actividad constrictiva de la Administración Pública
- El Derecho penal es cualitativamente distinto del Derecho administrativo sancionador, pues la función que cumplen no es la misma. Así, mientras que en el primero interesa la perturbación social o el sentido comunicativo del hecho concretamente realizado por el autor, por tanto, su función será proteger la vigencia de la norma defraudada; en el segundo, aquélla no tiene especial relevancia, por ende, su función será mantener el correcto

funcionamiento global de un determinado sector de actividad o administrativamente regulado, buscando su orden y eficacia.

- El fundamento ha de entenderse en un nivel político, por tanto, analiza la función tanto del Derecho penal como del Derecho administrativo sancionador para determinar qué supuesto de hecho será delito o infracción administrativa. De esta forma, se diferencia del bien jurídico y del objeto material.
- La definición del fundamento y el distinto alcance que tiene en el Derecho penal respecto al Derecho administrativo sancionador, trae como consecuencia la necesaria reinterpretación de este elemento para mantener incólume el derecho fundamental ne bis in idem. De esta manera, debe redefinirse como identidad de efectos; es decir, en base en un juicio de necesidad, se analizará si la sanción penal despliega los efectos empíricos que satisfacen las exigencias de la sanción administrativa aplicable, para poder imponer, además de la sanción penal, la sanción administrativa.
- La vertiente material del ne bis in idem prohíbe la sanción múltiple por lo mismo; es decir, cuando concurra un idéntico sujeto, hecho y fundamento, buscando evitar la doble valoración sancionatoria. Por su parte, la vertiente procesal, prohíbe el doble procesamiento por lo mismo; también cuando concurra la triple identidad, aunque con un contenido distinto al que se sigue en el plano material.

2. “LA INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM EN LA RELACIÓN DE SUJECCIÓN ESPECIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS”

- Tesis para optar el grado de maestro en la Universidad Nacional de Trujillo.
- De la Bachiller: LEAL PINEDO, María Teresa

Llego a la siguiente conclusión:

- El non bis in idem, al estar regulado por la Ley 27444, en su Art. 230, numeral 10, se aplica a los administrados, que mantiene una sujeción de carácter general. No se aplica a los trabajadores del sector público, que mantienen una relación de sujeción especial, y en tal sentido, soportan niveles más intensos de intervención administrativa. A estos trabajadores administrativos, la administración regula su actuación funcional.
- El procedimiento administrativo sancionador inserta características propias del Derecho Penal, ambas imponen sanciones o penas según sea el caso. La primera impone, generalmente, sanciones pecuniarias o no pecuniarias que, están en función a las limitaciones que se imponen al ejercicio de derechos de los ciudadanos y, el Derecho Penal tiene como función principal, imponer sanciones limitativas o privativas de derechos.
- El ordenamiento jurídico atribuye poderes sancionadores con el objeto de garantizar su propio mantenimiento y con la finalidad de reprimir conductas contrarias al mismo, este poder se atribuye a la potestad sancionadora penal y la potestad sancionadora administrativa (infracciones y sanciones penales e infracciones y sanciones administrativas).

- Existe un largo camino que recorrer en cuanto a la eficiente aplicación del principio del ne bis in idem procesal, que pasa por aceptar de parte de la administración que no puede “instruir un procedimiento” que además de constituir infracción administrativa tiene relevancia penal. Asimismo, debe buscarse mecanismos de coordinación entre los operadores judiciales y administrativos a fin de que se pueda afianzar este principio en el sistema punitivo peruano. Por último, no debe pensarse que la vigencia del principio del ne bis in idem constituye una traba a la rápida respuesta de la administración ante una conducta violatoria de una norma prohibitiva, sino que esta vigencia 87 debe entenderse como una garantía de cumplimiento de los principios del procedimiento administrativo.
- La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial viene determinando las pautas para la aplicación del ne bis in idem. Existe un desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial del principio del ne bis in idem que hace necesario su conocimiento y difusión para su correcta invocación y aplicación.
- Las relaciones especiales de sujeción se presentan en aquellas situaciones en las cuales la ley confiere poder a quien tiene la primacía (sujeto activo), para imponer una carga especial a quien está bajo su dependencia o subordinación (sujeto pasivo) y que difiere de la que en general tienen que soportar las demás personas. Estas cargas implican una cierta limitación a algunos derechos del sujeto pasivo de la relación,

dentro de unos límites impuestos por los valores y principios constitucionales que propugnan por la protección de la dignidad humana.

3. “APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN ÍDEM COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y EL CONTROL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”

- Tesis para optar el grado de maestro: en Derecho Administrativo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- Del Bachiller: MARTÍNEZ RONDINEL, Alberto Carlos.

Llego a la siguiente conclusión:

- La aplicación del principio non bis in ídem como derecho fundamental incide positivamente en el control del procedimiento administrativo sancionador en el Cercado de Lima, 2015.
- La observancia al debido proceso incide positivamente en la previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado.
- El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas sancionadora administrativamente previstas en la ley.
- El reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide positivamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la ley.

BASES TEÓRICAS

2.3. Definiciones conceptuales

1. La administración pública

La administración pública es la ciencia encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización. La dirección de ello se esto surge en torno a la organización de los recursos de una delimitada organismo público o privado; ello dando una delimitada organización dentro de la Administración Publica, la administración pública se connota por dos teorías:

- a. **Teoría orgánica.-** señala que la administración pública es una persona jurídica, el cual tiene como pilar la función pública o lo que comúnmente se conoce como legislación pública.
- b. **Teoría funcional.-** tiene como función la administración del Estado para poder dirigir y organizar los recursos.

2. El administrado

El administrado puede ser una persona de carácter natural y una persona jurídica, la persona natural puede ser cualquier ciudadano, mientras que la persona jurídica en la esfera del derecho público vendría hacer la administración Pública, la administración pública y los administrados mantienen un vínculo a través de las relaciones jurídicas.

3. Las relaciones jurídicas

Las relaciones jurídicas giran en torno a las situaciones jurídicas, el cual es la atribución que existe en un ciudadano, asimismo la relación que se establece entre la Administración Publica y el ciudadano se le conoce como relación jurídica, se debe aclarar que esto surge en torno al Derecho Administrativo, el cual permite alcanzar los

valores dentro de la Administración Pública y llevara consigo la interpretación de las relaciones jurídicas.

4. Procedimiento Conciliatorio

Tiene por objeto que los conflictos que exista entre las partes puedan solucionarlo sin llegar a un proceso judicial.

5. Principio de Legalidad.

El principio por la cual la autoridad administrativa debe actuar observando las normativas de la constitución y las normas legales que pudieran llevar a cabo un conflicto entre el ciudadano y la administración pública.

6. SISTEMAS QUE PRETENDEN EXPLICAR LA IMPRUDENCIA O CULPA

Los sistemas que pretenden explicar la imprudencia o culpa han sido diversos:

- a. **EL SISTEMA CAUSAL:** determina que la culpa tiene un componente psicomental que se encuentra relacionada desde el momento de una determinada infracción delictiva. Para esta teoría el dolo y la culpa son añadidas en la culpabilidad. Asimismo, el nexo causal se basa en la ausencia de resultado, es decir con el descuido de un deber de cuidado. Esta teoría fueron modificando sus elementos, pues señalan a la culpa en dos etapas:

En el injusto (tipo y antijuricidad) analiza la infracción al deber de cuidado objetivo y, en la culpabilidad, comprenderé la previsibilidad subjetiva del hecho en relación al autor.

- b. **EL SISTEMA FINALISTA:** Según el sistema finalista, es operador jurídico está delimitado por ciertas estructuras lógico-objetivas las cuales son

regulados en su labor de regulación. En tal sentido Welzel, señalo que las estructuras lógico-objetivas relevantes a estos efectos eran la acción humana como acción final y el poder actuar de un modo distinto.

c. EL SISTEMA FUNCIONALISTA: Ha planteado una serie de cambios estructurales en la fórmula de los delitos culposos. Así reemplazan el concepto de la infracción del deber de cuidado por los criterios de imputación objetiva, en especial, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ROXIN, por su parte señala que el elemento de la infracción del deber de ciudadano no conduce más allá que los criterios generales de imputación. En relación la concepción de la culpa o imprudencia, siguiendo los postulados de LISZT, se le identifica como un supuesto error de tipo. JAKOBS expresa que uno de los casos que no corresponden a la representación de la realidad, o sea, un supuesto de error si es que no se trata más bien de ceguera ante los hechos. Además considera que la imprudencia es aquella forma de evitabilidad que la que falta el conocimiento actual de lo que ha de evitarse. El estado actual de la cuestión se ha cerrado en la moderna teoría de la imputación objetiva.

7. LA IMPUTACIÓN EN LOS DELITOS IMPRUDENTES O CULPOSOS

7.1. FUNDAMENTOS POLÍTICOS CRIMINALES

Felipe Villavicencio T. citando a Muños Conde y a García Aran señala que la “la industrialización, la tecnificación y sus influencias en la vida social, en particular la manipulación de máquinas y el tráfico automotor, han originado un incremento de las fuentes de riesgo a los que el ser humano está

expuesto, y a su vez han originado el desarrollo de normas de cuidado” (Felipe Villavicencio T. Derecho penal parte especial Pág. 381). Es considerable el número de delitos cometidos a título de imprudencia, principalmente en los accidentes de tránsito, es decir de cierto modo circunstancial al progreso humano basado en el desarrollo técnico e industrial, a partir del cual comenzó a adquirir importancia cuantitativa la imprudencia punible, dando lugar surgimiento de normas específicas en el orden penal sustantivo procesal.

7.2. TIPO IMPRUDENTE COMO TIPO ABIERTO

La variedad de conductas imprudentes, hace imposible describirlas a todas de manera expresa. El delito imprudente es un tipo abierto requiere de una norma de cuidado que permita identificar el correspondiente deber de cuidado y con ello complete o cierre el tipo penal. Pero esta determinación no es absoluta. Corresponde al juez Identificar y determinar el contenido de la conducta imprudente prohibida. Por ejemplo el artículo 111 del código penal reprime al agente que por culpa causa muerte de una persona. Aquí la ley no indica característica en la conducta típica tal como acontece con el asesinato o el infanticidio doloso, sino que hace una regulación amplia abierta que debe ser completada por el juzgador en cada caso concreto y limitado la amplitud típica de la afectación del deber de cuidado

7.3. SISTEMA DE NUMERUS CLAUSUS DEL DELITO IMPRUDENTE

El código penal de 1991, conserva el sistema franco-germánico o de numerus Clausus para el tratamiento del delito culposo así que el artículo 12

segundo el párrafo del Código Penal señala “el agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos en la ley”, esta técnica legislativa de imputación cerrada de la imprudencia no impide que nuestro ordenamiento jurídico-penal a veces utilice un sistema de imputación genérica limitada que introduzca una cláusula general de imprudencia o culpa para determinados capítulos de la parte especial o específicos delito. Ejemplo: delitos de contaminación propagación imprudentes (artículo 295) delitos contra los medios de transporte y comunicación y otros servicios públicos por culpa (artículo 282 del código penal) delitos de peligro común por imprudencia (artículo 278 del código penal) JAVIER Villa Stein, citando Mir Puig, señala que “el sistema *numerus clausus* es garantista pues permite con más seguridad jurídica saber en qué casos en el supuesto culposo se trata de una tipificación cerrada y excepcional de la imprudencia” (JAVIER JAVIER VILLA STEIN; Derecho Penal Parte General Pág. 261)

8. IMPUTACIÓN DE LA CONDUCTA

Los tipos imprudentes no ofrecen ninguna información y medida del cuidado que es preciso observar. El derecho penal no puede obligar a nadie más allá de la observancia del cuidado que objetivamente era exigible en el caso concreto al que se encontraba en esta situación, por ello, solo la lesión del deber de cuidado convierte la acción en acción imprudente.

Para determinar el deber de cuidado, se parte de un criterio objetivo, en el sentido de contar con un baremo o medida objetiva, que permitirá al juez analizar la conducta concreta frente a aquella que hubiere ejecutado un “hombre prudente”. Así, por ejemplo, se pregunta: ¿Cómo se habría comportado en la situación concreta una persona consciente y cuidadosa perteneciente al sector del tráfico del sujeto infractor? Si la situación del sujeto infractor se encuentra dentro del marco de conducta que hubiese ejecutado el hombre prudente (baremo), el deber de cuidado no ha sido violentado; pero si al contrario, dicho infractor sobrepasa los límites de este marco, se puede considerar como imprudente su actuación. Pero no siempre es posible recurrir solo a estos conceptos medios (“hombre prudente”), “ciudadano promedio”, “hombre normal”, “buen conductor”), que pueden resultar imprecisos para determinados casos.

En este sentido, no solo se trata de evaluar la conducta desde el criterio de un hombre diligente en la situación del autor, que puede resultar inexistente e indeterminable, sino también desde la perspectiva de un comportamiento específico del sujeto. Se trata por tanto de una evaluación de la capacidad individual del autor (individualización del criterio de cognoscibilidad). Creemos que no se trata de aceptar la valoración de aspectos psíquicos del autor.

8.1. FORMAS DE DEBERES DE CUIDADO

8.1.1. DEBER DE CUIDADO INTERNO (DEBER SUBJETIVO DE CUIDADO)

“Es aquel juicio que recae sobre la capacidad individual: son los conocimientos especiales, deberes profesionales, etc. tales elementos servirán de barómetro para poder establecer si el autor contaba con poder de evitabilidad, es decir, si ha ovado negligentemente y asimismo si le era exigible” (ALONSO RAUL, Peña Cabrera Freyre; Derecho Penal parte General. Pág. 689).

Para la existencia del tipo imprudente no es suficiente la constatación de un peligro objetivo, sino que es necesario que ese peligro sea cognoscible por el sujeto. La obligación de advertir el peligro para el bien jurídico supone siempre la posibilidad de preverlo, de ahí la relevancia del elemento de la previsibilidad para determinar la infracción del deber de cuidado interno.

8.1.2. DEBER DE CUIDADO EXTERNO (DEBER OBJETIVO DE CUIDADO)

Consiste en la obligación de comportarse conforme a la norma de cuidado, con el objeto de evitar la producción de resultado típico. Javier Villa Stein señala que “tres son las normas que adopta el deber de cuidado externo:

- Deber de omitir acciones peligrosas. Se trata de evitar acciones que en sí mismas están prohibidas. Incumplen

este deber tanto los que afrontan una acción peligrosa sin ninguna preparación (ejemplo: la conducción de un automóvil, en plena vía pública, por parte de un aprendiz), como aquellos que estando capacitados, sin embargo, dadas las circunstancias, su preparación no alcanza para afrontar el peligro (ejemplo: la conducción de un automóvil, en plena vía pública, por parte del chofer en estado de ebriedad). Es decir, hay comportamientos que de por sí son peligrosos y llevan implícita la infracción del deber de cuidado.

- Deber de tomar las precauciones del caso e información previa.- Este deber consiste en tener particular cuidado antes de emprender acciones peligrosas, tomando medidas externas, es decir, se exige antes de la ejecución de cualquier tipo de acciones peligrosas. Ejemplo: la verificación del estado técnico antes de que este despegue vuelo; el mantenimiento permanente de las máquinas industriales.
- Deber de actuar prudentemente en situaciones de riesgo o peligrosas.- Se presenta cuando el individuo se encuentre ante situaciones riesgosas aunque socialmente necesarias, se le exige que actúe prudentemente o incremente el cuidado para evitar

sobrepasar el riesgo tolerable” (JAVIER, Villa Stein; Derecho Penal Parte General. Pag. 266).

- El deber objetivo de cuidado, aparece recogido en reglas generales de carácter técnico que expresan prohibiciones de conductas para aquellos supuestos en los que la experiencia general de la vida demuestra una gran probabilidad de que una acción de esa índole lesione un bien jurídico. Estas reglas se plasman en leyes, reglamentos, ordenanzas, principios jurisprudenciales, usos y costumbres, pero no coinciden exactamente con el deber objetivo de cuidado, pues aquellas tienen un carácter general meramente individual u orientativo, mientras que el deber objetivo de cuidado ha de determinarse en cada situación concreta, de acuerdo con diferentes factores e interés en juego. Por ello. Puede afirmarse que la inobservancia de la norma de cuidado no conlleva “eo ipso” la realización típica del hecho imprudente, sino que será precisa la concreción del deber objetivo de cuidado a través de una valoración judicial.

Dentro de la temática de la imprudencia profesional adquieren notoria relevancia las reglas técnicas que se imponen jurídicamente para algunas actividades profesionales.

Así, en el sector del tráfico automovilístico concurre una legislación pormenorizada sobre el cuidado que ha de aplicarse en circulación de vehículos de motor, como es el caso de las normas de tránsito, de seguridad industrial o la llamada *lex artis* que obliga ciertos profesionales.

9. IMPUTACIÓN DEL RESULTADO

Es imprescindible el resultado en los delitos culposos. Integra el tipo. Realiza un hecho previsto en el tipo doloso. Es necesario que el resultado lo sea a causa de la infracción del deber de cuidado y que se le pueda imputar objetivamente al autor. Consideramos que no hay diferencias esenciales entre ambos tipos de injusto (doloso e imprudente) para la imputación del resultado. “Entre la acción y el resultado se presenta la relación de causalidad, la que en los delitos culposos gira sobre la teoría de equivalencia de condiciones-toda causa es condición de un resultado-. La producción del resultado se da por la inobservancia del deber objetivo de cuidado, el cual debe poderse imputar objetivamente al mismo”.(LUIS MIGUEL, Bramont-Arias Torres; Derecho Penal, Lecciones de la Parte General, Pág. 110).

No cualquier conducta que viole un deber de cuidado es un delito imprudente, se requiere además un resultado típico previsto en nuestro código penal. Ejemplo. El automovilista que conduce el vehículo contra el

sentido del tráfico (imputación de la conducta, será sancionado penalmente, solo si origina un resultado típico (muerte o lesión de un peatón, artículo 111 o 124, código penal). Generalmente se afirma que el resultado es una condición objetiva de punibilidad.

El resultado ha generado por la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Este riesgo debe de provenir de la acción imprudente del autor. Es decir, de la infracción del deber de cuidado que le será exigible. Aquí, al lado de la causalidad, adquiere un papel importante que la causación del resultado se ubique en la finalidad de protección de la norma de cuidado infringida por el sujeto.

La exigencia del riesgo típico es consecuencia de la infracción de la norma de cuidado, es decir, con la infracción de la norma de cuidado se está creando el riesgo jurídicamente desaprobado. Lo que importa aquí es que el resultado sea imputable al sujeto por el riesgo derivado de la infracción de la norma de cuidado. Así pues, se negará la imputación objetiva del resultado si se ha producido por causas ajenas a la conducta imprudente del autor. “La imputación objetiva se excluye cuando la acción que causalmente ha producido el resultado no supera los límites del riesgo permitido. Ello significa que tales acciones no son típicas” (ENRIQUE, Bacigalupo; Derecho Penal LI Parte General, Pág. 267).

El resultado típico debe encontrarse dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado que ha sido infringido. Una conducta

imprudente no es imputable objetivamente si de ella se produce un resultado que no tiene nada que ver con la norma de cuidado infringida.

9.1.1.1. IMPUTACIÓN SUBJETIVA

En la imputación subjetiva imprudente es importante determinar si el peligro causado pudo ser conocido por el sujeto. Para este fin es preciso indagar sobre la cognoscibilidad y la previsibilidad. Conocimiento o cognoscibilidad y previsibilidad son, por tanto, dos perspectivas distintas del deber subjetivo de cuidado como contenido del tipo subjetivo imprudente. Estas dos categorías están estrechamente relacionadas.

El núcleo duro de la imputación subjetiva imprudente se ubica en la cognoscibilidad y se entiende como exigibilidad del conocimiento del peligro que se determina en el caso concreto atendiendo a todas las circunstancias objetivas concurrentes, a los conocimientos actuales y previos del autor y a su capacidad. La cognoscibilidad, así entendida es, precisamente, lo que denominamos previsibilidad individual -deber prever-. Ejemplo: el agente debe prever que es peligroso conducir un automóvil sin revisar el estado de sus frenos.

“En la imputación subjetiva, habrá que incluir a la previsibilidad y la cognoscibilidad como la exigencia que recaía en el autor de realizar una determinada acción o de omitir su realización, deber que se desprende del directivo de conducta plasmado en la norma de cuidado”. (ALONSO RAUL, Peña-Cabrera Freyre; Derecho Penal, Parte General, Pág. 693).

La previsibilidad se tratara tanto desde una perspectiva objetiva se refiere a la posibilidad de previsión de cualquier ciudadano prudente en la producción del resultado típico. El juez va a determinar si hubiera podido prever un hombre prudente (sujeto ideal), ubicado en la posición de infractor; además, con los conocimientos de este que, si son menores que los del sujeto ideal, no le restan a este su conocimiento y capacidad de previsión normal, pero si son superiores o excepcionales, se suman a los del sujeto ideal, aumentando correlativamente la posibilidad objetiva de previsión. La previsibilidad personal o individual considera las posibilidades concretas del agente en las circunstancias en que actuó en relación a su experiencia y conocimientos especiales. “El fundamento de la punibilidad del delito es el desprecio que el autor demuestra respecto de los bienes jurídicos ajenos, sea que no ha pensado en la lesión que causa o por que supone falsamente que su acción no causara lesión alguna” (ENRIQUE, Bacigalupo; Derecho Penal Parte General, Pág. 327).

Para el juez se trata de una apreciación objetiva, en el caso concreto y sobre el autor específico. En este sentido, se puede diferenciar entre culpa consciente y culpa inconsciente, aunque recientemente se busca superar esta distinción. El código penal peruano no establece diferencias para los efectos de punibilidad.

2.4. HIPOTESIS

i. HIPOTESIS GENERAL

La implicancia del Principio del Non Bis In Idem en los procesos administrativos en la Municipalidad de Huayllay.

ii. HIPOTESIS ESPECIFICAS

- a. Los criterios generales para la aplicación del Principio del Non Bis In Idem en los procesos administrativos de Huayllay.
- b. La aplicación por partes de los funcionarios públicos cumple con los procesos administrativos dentro de la Municipalidad de Huayllay. .
- c. La relevancia del Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad de Huayllay.

○ VARIABLES

iii. VARIABLE INDEPENDIENTE

- Factores que inciden en la inaplicación del Non Bis In Idem

iv. VARIABLE DEPENDIENTE

10.Municipalidad de Huayllay

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIONES
INDEPENDIENTE Factores que inciden en la inaplicación del Non Bis In Idem	Principio del Procedimiento Administrativo sancionador
DEPENDIENTE Municipalidad de Huayllay	Funcionarios y/o Servidores Públicos

CAPITULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MÉTODO Y DISEÑO

3.1.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACION

En la presente investigación hemos utilizado los siguientes métodos, la misma se relaciona con la naturaleza de la investigación estos son:

3.1.1.1. MÉTODO HISTÓRICO COMPARATIVO

Nos permitió determinar los criterios relacionados para la aplicación del Principio del Non Bis In Idem en la Municipalidad de Huayllay.

3.1.1.2. MÉTODO DIALECTICO

Nos permitió el estudio de la doctrina administrativa y penal, frente a los procesos sancionadores donde intervienen directamente los administrativos de la Municipalidad de Huayllay, cabe precisar que cada uno de ellos se relaizo con los mecanismos adecuados frente al Principio del Non Bis in Idem. .

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se encuadra en el diseño no experimental. Por ser descriptivo explicativo (transeccional) y por ser longitudinal, porque abarco el periodo de estudio correspondiente al 2016 (espacio temporal)

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION

3.2.1.1. INVESTIGACION DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL:

Por qué se describió mediante la relación de las variables analizadas en función de la hipótesis de trabajo y se recolecto datos de un grupo de sujetos con el cual se determinó la subsecuente relación entre estos conjuntos de datos

3.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación se enmarca dentro del nivel explicativo, porque se explicó mediante la relación de las variables analizadas en función de la hipótesis de trabajo.

3.3. POBLACION Y MUESTRA

3.3.1. POBLACION

La población para el presente trabajo de investigación estuvo constituida por los operadores administrativos de la Municipalidad de Huayllay del distrito judicial 2016.

3.3.2. DELIMITACION GEOGRAFICA-TEMPORAL Y TEMATICA

El presente trabajo de investigación se encuentra delimitado bajo las siguientes dimensiones:

- **Dimensión Espacial**

La presente investigación se 10 expedientes.

- **Dimensión Metodológica**

La presente investigación se enmarcara dentro de los fundamentos teóricos, doctrinales y tecnológicos del Derecho Penal como también en la metodología y procedimiento de la investigación desarrollada

- **Dimensión Temporal**

La presente investigación abarcara el periodo comprendido del año 2016, con la finalidad de poder caracterizar, describir y explicar las características de las variables del presente estudio.

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

3.4.1. PARA LA RECOLECCION DE DATOS

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acudirán al empleo de técnicas de recolección y tratamiento de datos y como instrumentos el cuestionario diseñado por la escala de Likert, y así poder contribuir en el Ordenamiento Jurídico en el Distrito Judicial de Pasco (Huayllay).

a. Entrevistas y Encuestas: La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, las mismas que serán aplicadas a los especialistas y expertos con respecto a los aspectos legales en procesos administrativos sancionadores.

b. Análisis Estadístico: los que se utilizaran de los datos relacionados a las variables durante el periodo 2016

3.4.2. PARA LA PRESENTACION DE DATOS

Los datos obtenidos fueron presentados en cuadros, en tablas estadísticos

3.4.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se empleó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que permitió la tabulación de datos.

CAPITULO IV

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

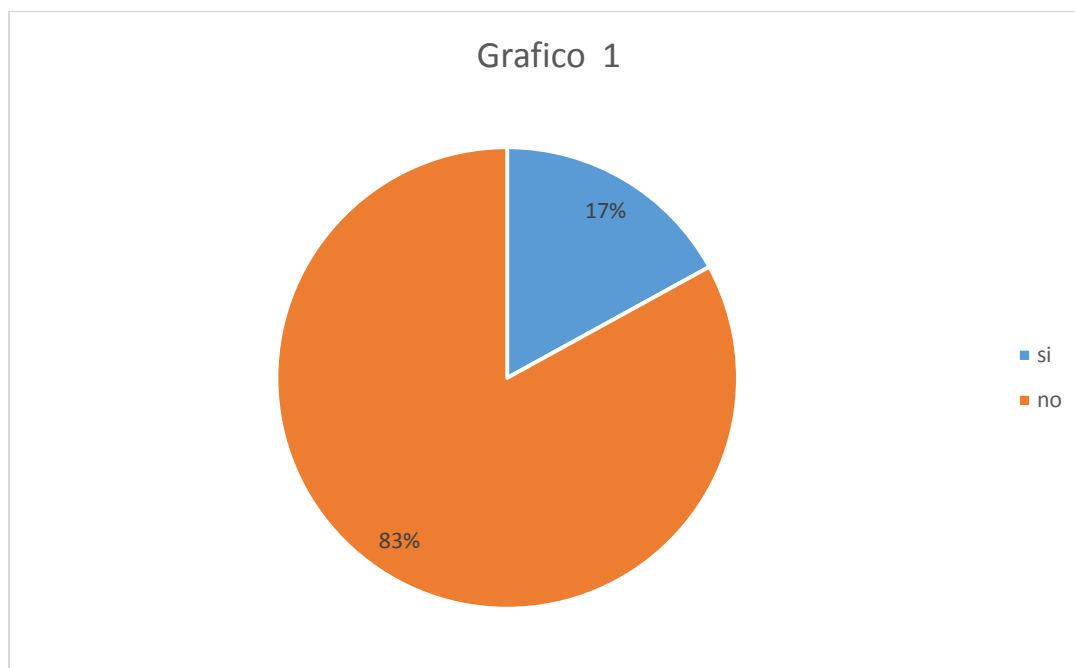
4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

4.1.1. RESULTADOS DE APLICACIÓN ESTADISTICA DE LOS GRAFICOS DE LA ENCUESTRA PRACTICADOS A LOS SEÑORES ADMINISTRADOS.

1. ¿CONOCE USTED SOBRE EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM?

TABLA N° 01

	N° de encuestados	porcentaje
Si	8	83%
no	40	17%
Total	48	100%



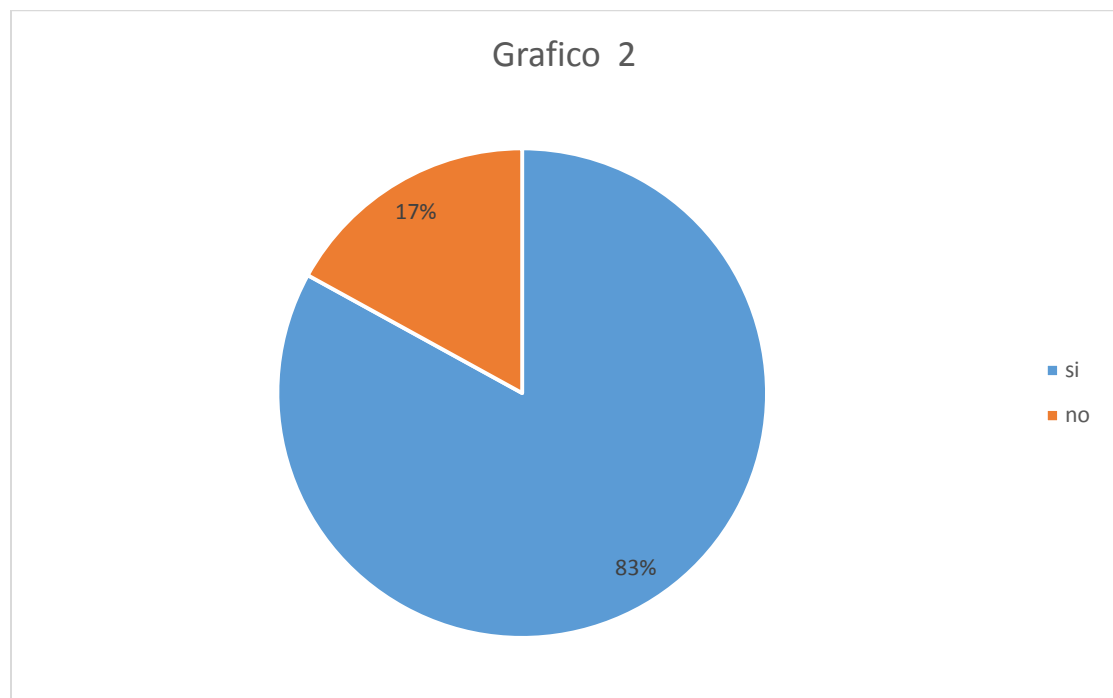
Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 83% refiere que no, el 17% refiere que si, conoce usted sobre el principio non bis in ídem.

2. ¿CREE USTED QUE EN ALGUNA OCASIÓN RECIBIÓ MÁS DE UNA SANCIÓN POR UN MISMO HECHO?

TABLA N° 02

	N° de encuestados	porcentaje
Si	40	83%
no	8	17%
Total	48	100%



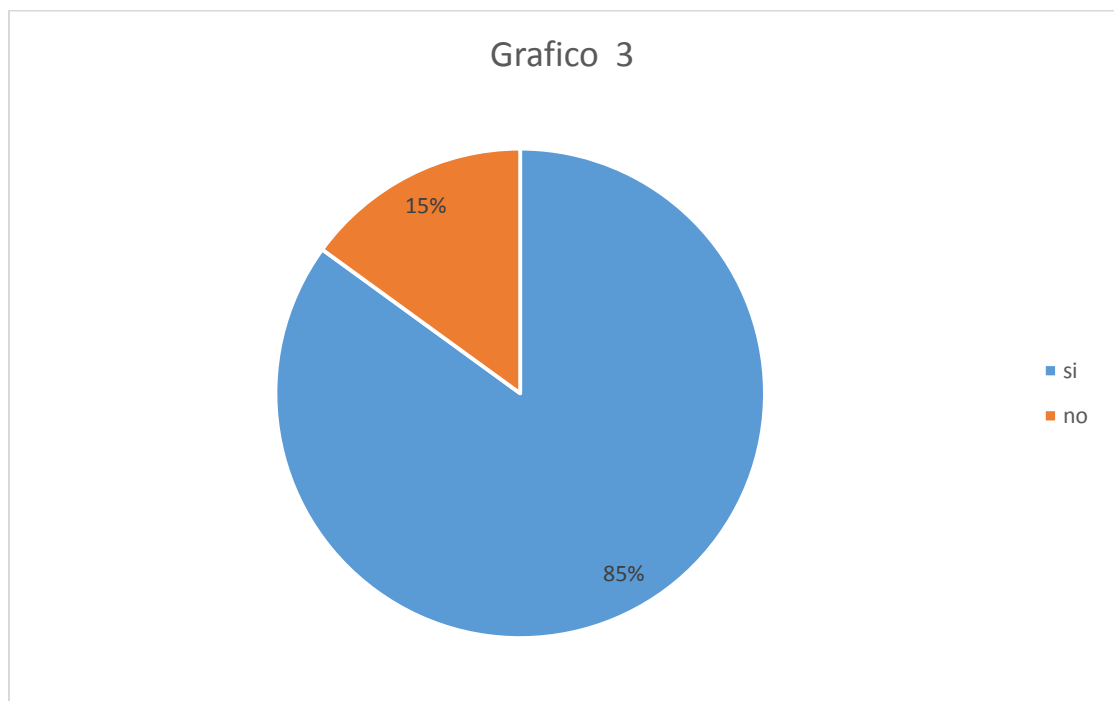
Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 83% refiere que sí, el 17% refiere que no, cree que en alguna ocasión recibió más de una sanción por un mismo hecho.

3. ¿FUE USTED SANCIONADO PENAL Y ADMINISTRATIVAMENTE POR UN MISMO HECHO?

TABLA N° 03

	N° de encuestados	porcentaje
Si	41	85%
no	7	15%
Total	48	100%



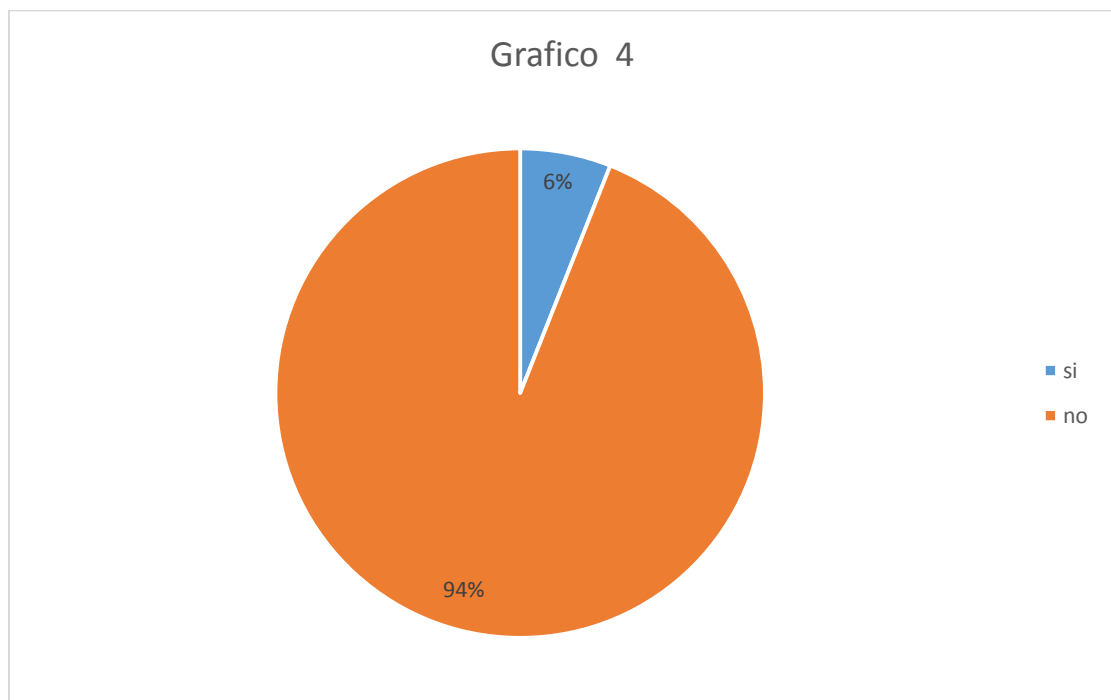
Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 85% refiere que sí, el 15% refiere que no, fue sancionado penal y administrativamente por un mismo hecho.

4. ¿CONSIDERA USTED QUE LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY APLICA EL PRINCIPIO *NO BIS IN ÍDEM* AL MOMENTO DE SANCIONAR?

TABLA N° 04

	N° de encuestados	porcentaje
Si	3	6%
no	45	94%
Total	48	100%



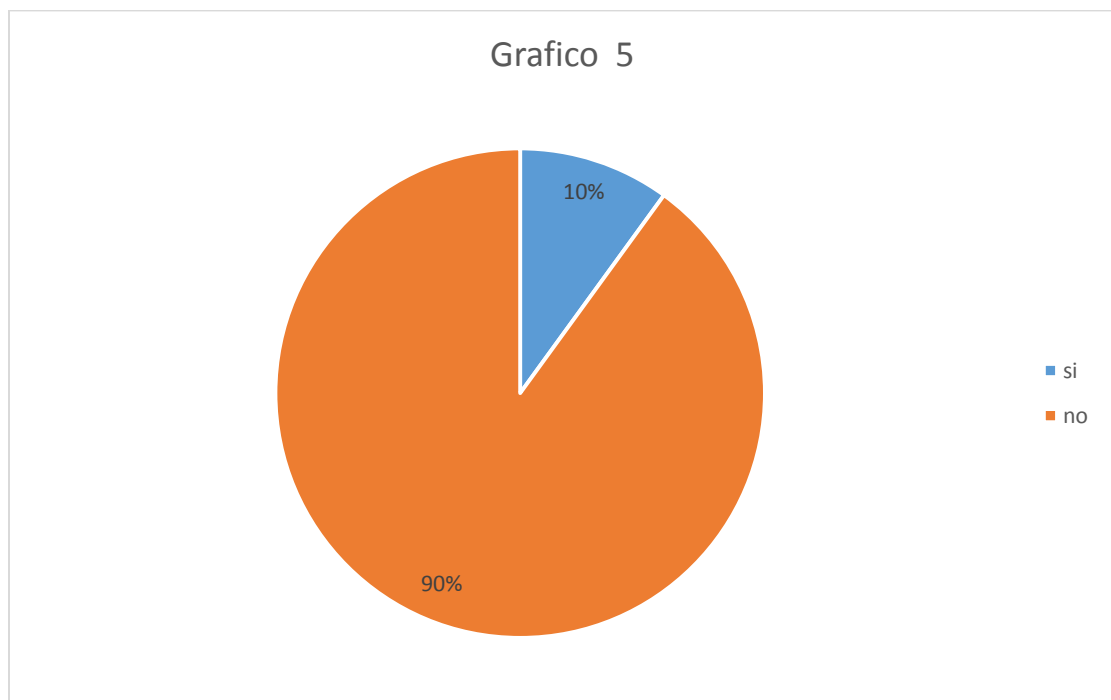
Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, la municipalidad de huayllay aplica el principio no bis in ídem al momento de sancionar.

5. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO QUE ACCIONES PUEDE REALIZAR SI LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY NO RESPETA EN PRINCIPIO *NO BIS ÍDEM*?

TABLA N° 05

	N° de encuestados	porcentaje
Si	5	10%
no	43	90%
Total	48	100%



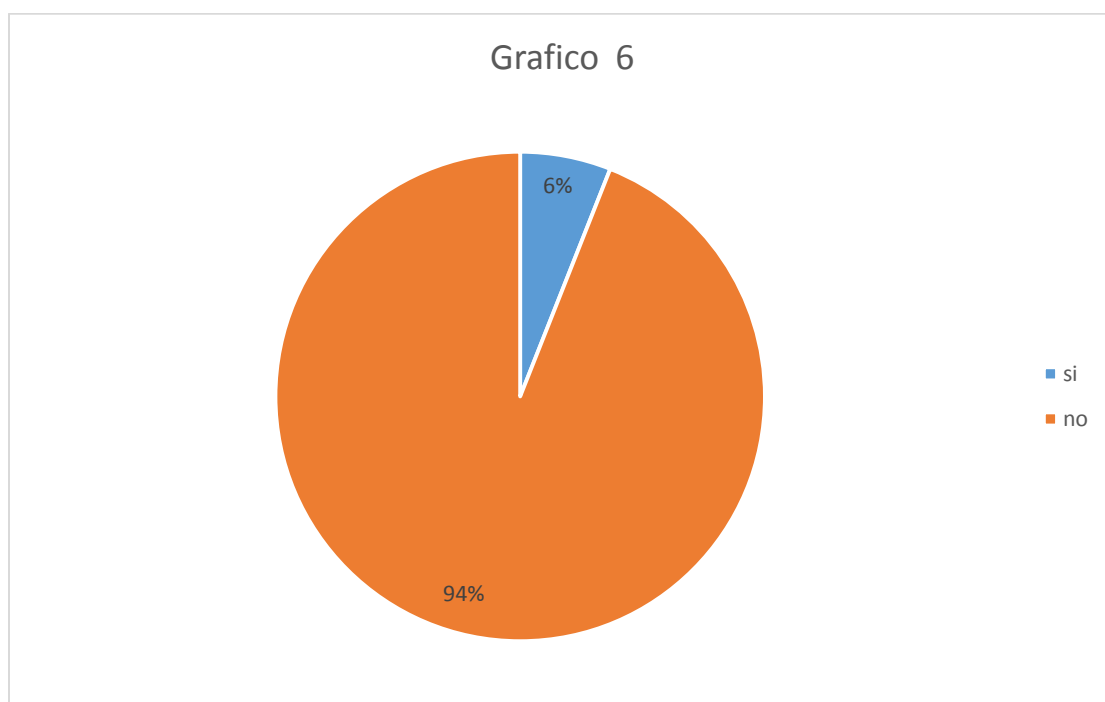
Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 90% refiere que no, el 10% refiere que sí, sabe que acciones puede realizar si la municipalidad de huayllay no respeta en principio *no bis ídem*.

6. SABE USTED ¿QUÉ LA ENTIDAD PÚBLICA DEBE ABSTENERSE DE CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONAR LA CONDUCTA DE EXISTIR IDENTIDAD DE SUJETOS, HECHO Y FUNDAMENTO ENTRE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA PENAL?

TABLA N° 06

	N° de encuestados	porcentaje
Si	3	6%
no	45	94%
Total	48	100%



Interpretación

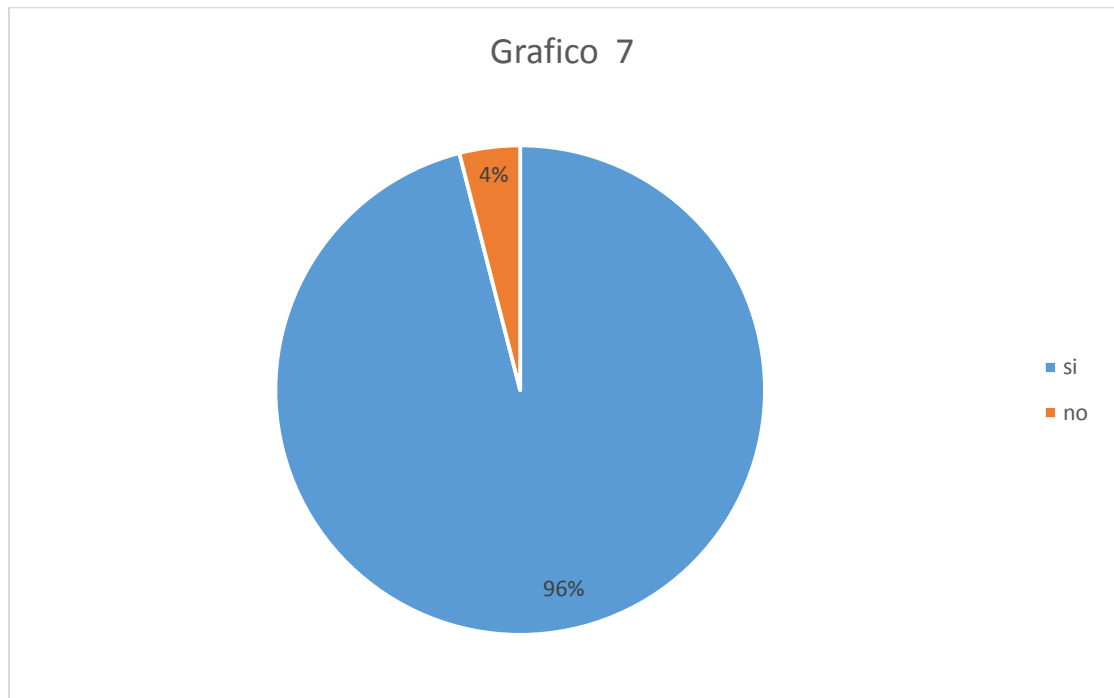
En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe qué la entidad pública debe abstenerse de continuar el procedimiento

administrativo y sancionar la conducta de existir identidad de sujetos, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal.

7. ¿CREE USTED QUE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO NO BIS ÍDEM SE DEBA A LA FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY?

TABLA N° 07

	N° de encuestados	porcentaje
Si	46	96%
no	2	4%
Total	48	100%



Interpretación

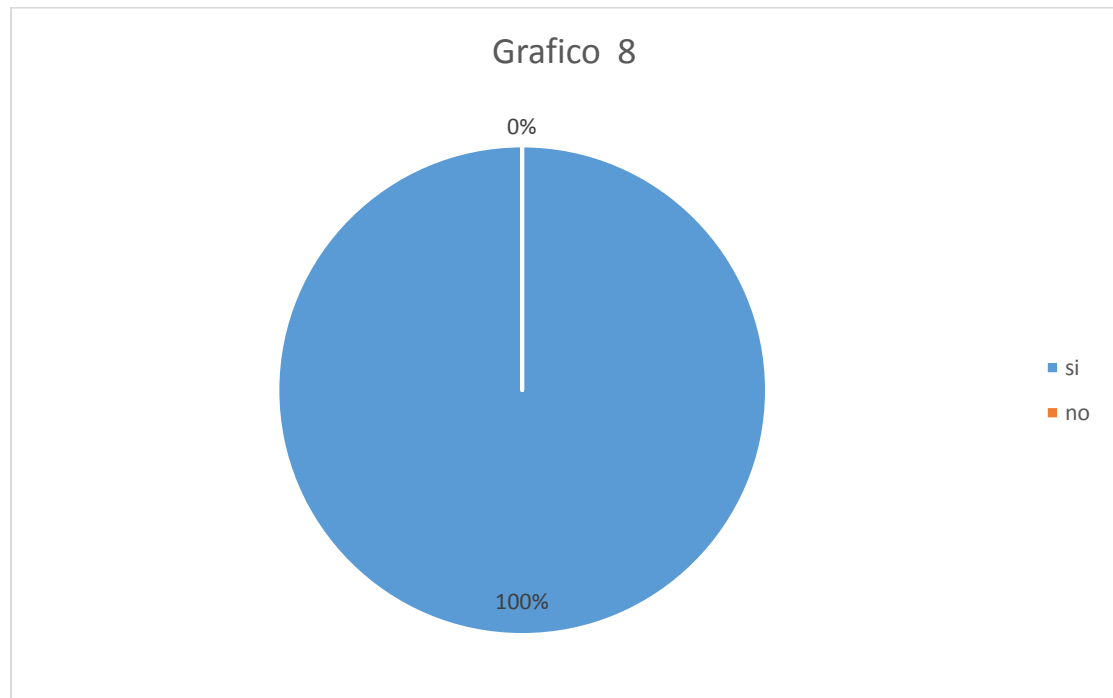
En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 96% refiere que sí, el 4% refiere que no, que la

vulneración del principio no bis ídem se deba a la falta de conocimiento del personal administrativo de la municipalidad de huayllay.

8. CONSIDERA USTED NECESARIO QUE LA MUNICIPALIDAD DE HUAYLLAY CREE UN ÁREA ESPECIALIZADA PARA CASOS QUE PUEDAN SER SANCIONADOS TANTO ADMINISTRATIVA COMO PENALMENTE

TABLA N° 08

	N° de encuestados	porcentaje
Si	48	100%
no	0	0%
Total	48	100%



Interpretación

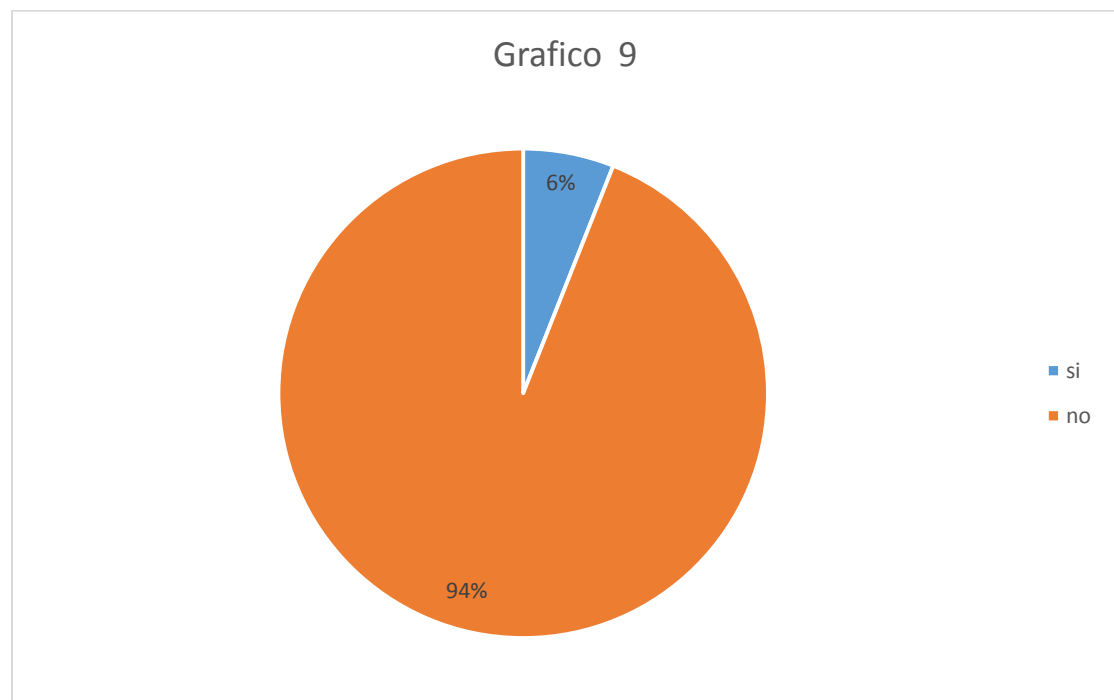
En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 100% refiere que sí, el 0% refiere que no,

considera necesario que la municipalidad de huayllay cree un área especializada para casos que puedan ser sancionados tanto administrativa como penalmente.

9. SABE USTED ¿QUÉ PRINCIPIO *NON BIS IN IDEM* PUEDE SER APLICADO A LAS PERSONAS JURÍDICAS?

TABLA N° 06

	N° de encuestados	porcentaje
Si	3	6%
no	45	94%
Total	48	100%



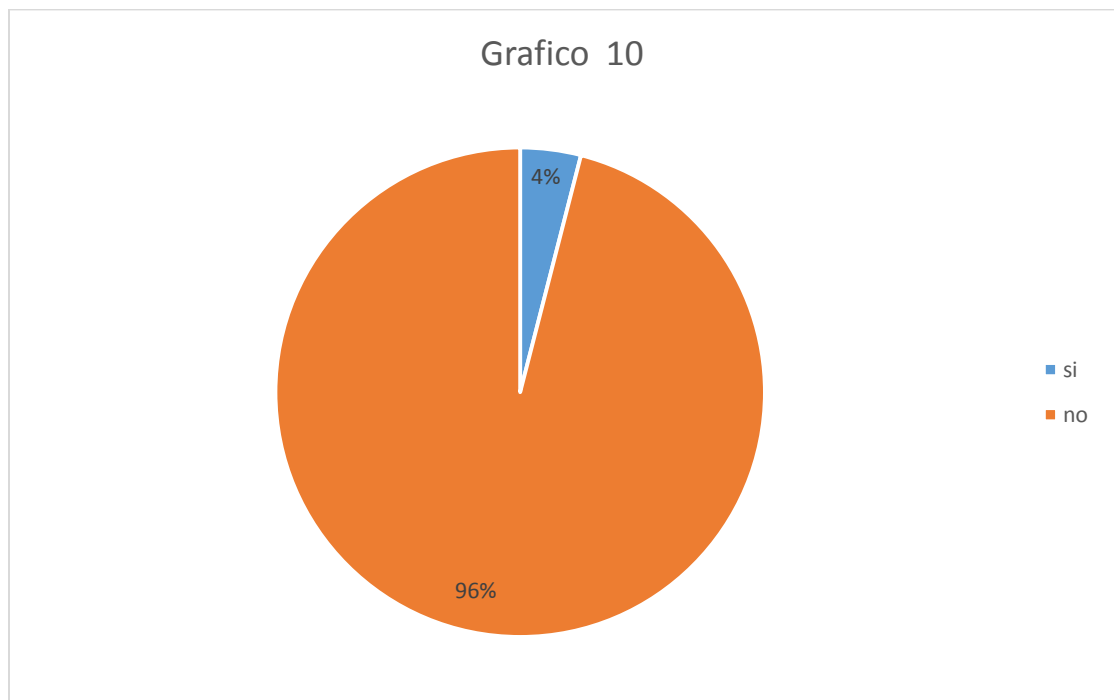
Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe qué principio *non bis in idem* puede ser aplicado a las personas jurídicas.

10.SABE USTED ¿A QUÉ SE REFIERE LA INTERDICCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL?

TABLA N° 10

	N° de encuestados	porcentaje
Si	2	4%
no	46	96%
Total	48	100%



Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe sobre la interdicción de la persecución penal.

CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1. CONTRASTACION Y VALIDEZ DE HIPOTESIS

En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe sobre la interdicción de la persecución penal, asimismo, se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe qué principio *non bis in idem* puede ser aplicado a las personas jurídicas. En tal sentido se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 100% refiere que sí, el 0% refiere que no, considera necesario que la municipalidad de huayllay cree un área especializada para casos que puedan ser sancionados tanto administrativa como penalmente, se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 96% refiere que sí, el 4% refiere que no, que la vulneración del principio no bis ídem se deba a la falta de conocimiento del personal administrativo de la municipalidad de huayllay.

En ese sentido se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe qué la entidad pública debe abstenerse de continuar el procedimiento administrativo y sancionar la conducta de existir identidad de sujetos, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal, asimismo, se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 90% refiere que no, el 10% refiere que sí, sabe que acciones puede

realizar si la municipalidad de huayllay no respeta en principio *no bis ídem*. Por último se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, la municipalidad de huayllay aplica el principio no bis in ídem al momento de sancionar pues se aplicó el cuestionario tenemos que el 85% refiere que sí, el 15% refiere que no, fue sancionado penal y administrativamente por un mismo hecho. En el presente grafico se puede observar que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 83% refiere que no, el 17% refiere que sí, conoce usted sobre el principio non bis in ídem.

CONCLUSIONES

1. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe sobre la interdicción de la persecución penal.
2. Quede de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe qué principio *non bis in idem* puede ser aplicado a las personas jurídicas.
3. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 100% refiere que sí, el 0% refiere que no, considera necesario que la municipalidad de huayllay cree un área especializada para casos que puedan ser sancionados tanto administrativa como penalmente.
4. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 96% refiere que sí, el 4% refiere que no, que la vulneración del principio *non bis in idem* se deba a la falta de conocimiento del personal administrativo de la municipalidad de huayllay.
5. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, sabe qué la entidad pública debe abstenerse de continuar el procedimiento administrativo y sancionar la conducta de existir identidad de sujetos, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal.

6. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 90% refiere que no, el 10% refiere que sí, sabe que acciones puede realizar si la municipalidad de huayllay no respeta en principio *no bis ídem*.

7. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 94% refiere que no, el 6% refiere que sí, la municipalidad de huayllay aplica el principio no bis in ídem al momento de sancionar pues se aplicó el cuestionario tenemos que el 85% refiere que sí, el 15% refiere que no, fue sancionado penal y administrativamente por un mismo hecho.

8. Que de las 48 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 83% refiere que no, el 17% refiere que sí, conoce usted sobre el principio non bis in ídem.

RECOMENDACIONES

- 1- Se necesita un mayor criterio al momento de aplicar el principio del Non Bis In Idem.
- 2- Se necesita mayores criterios en los servidores o funcionarios públicos al momento de interpretar el Principio del Non Bis In Idem.
- 3- Se requiere delimitar la diferencia entre las ramas del Derecho Penal y el Derecho Administrativo, para tener una adecuada interpretación del principio del Non Bis In Idem.
- 4- Que se requiere realizar capacitaciones con expertos en procesos sancionadores para la adecuada aplicación del Principio del Non Bis In Idem.
- 5- Delimitar claramente los criterios en que señala el Tribunal Constitucional cuando se aplica el Principio del Non Bis In Idem. .

BIBLIOGRAFÍA

- ABABITARTE, Alfredi Gallego, “Transferencia y descentralización; delegación y desconcentración; mandato y gestión o encomienda”, en Revista de administración Publica, N° 122, Madrid 1990.
- ARROYO JIMÉNEZ, Luis, “Ponderación, proporcionalidad y Derecho administrativo”, en V.V.A.A, Ponderación y Derecho Administrativo (coordinadores: Luis ORTEGA y Susana DE LA SIERRA), Marcial Pons, Madrid, 2009.
- BACA ONETO, Víctor Sebastián, “¿Responsabilidad subjetiva u objetiva en materia sancionadora? Una propuesta de respuesta a partir del ordenamiento peruano”, en: V.V.A.A., Estudios de Derecho Administrativo, N°2,2010.
- BARRA, Rodolfo, “Administración y actividad consultiva”, en: Cuestiones de procedimiento administrativo Jornadas organizadas por la Universidad Austral 2005.
- BERMEJO VER, José, “La Administración inspectora”, en: Revista de Administración Publica N° 147, Madrid 1998.
- Calvo chamorro, María, “Silencio positivo y acciones declarativas” en: Revista de administración pública N° 128,1992.
- CARRILLO ARTILES, Carlos Luis, “Desistimiento y Perención como formas de terminación anormal de los Procedimientos Administrativos”, en: Ámbito Jurídico, Legis, Caracas, 2014.

- CASSAGNE, Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la administración” en: La Ley, 15 de agosto de 2012, N° 1, La ley, Buenos Aires, 2012.
- CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho administrativo, T. I., Lexis Abeledo-Perrot, 7° edición actualizada, Buenos Aires.
- Castillo medina, Gaby, “cargas probatorias dinámicas en los procedimientos administrativos”, en: Ita Ius Esto. Revista de Estudiantes, 10° edición, UDEP, Piura, 2014.
- CÉPEDA, Gladys Camacho, “Los particulares como sujetos del procedimiento administrativo”, en Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho, N° 67, Lima 2011.
- CIERCO SIEIRA, César, “epidemias y Derecho administrativo. Las posibles respuestas de la Administración en situaciones de grave riesgo sanitario para la población”, en: Derecho y Salud, Vol. 13 N° 2, julio – diciembre 2005.
- DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, “El procedimiento de cobranza coactiva como manifestación de la potestad de la administración pública de ejecución forzosa de sus actos”, en. THÉMIS. Revista de derecho, 2° época, N° 32, PUCP, Lima, 1995.
- DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, “Notas acerca de la potestad sancionadora de administración pública”, en. Ius Et Veritas, N° 10, PUCP, Lima 1995.
- DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, “régimen de la Nulidad de los Actos Administrativos en la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General”, en: V.V.A.A., Comentarios a la Ley del Procedimiento

- Administrativo General – ley N° 27444, 2° parte, Ara Editores, Lima, julio 2003.
- ESTELA HUAMÁN, José Alberto, “El procedimiento de Ejecucion Coactiva”, en: revista de Derecho administrativo, N°11 (Especial. Contencioso administrativo), circulo de Derecho Administrativo, PUCP, Lima, 2012.
 - GARRIDO FALLA, Fernando, “El negocio jurídico del particular en el Derecho administrativo”, en: Revista de administración Publica, N° 1, Madrid, 1950.
 - GARRIDO FALLA, Fernando, “La doctrina del silencio administrativo”, en: Revista de administración pública, N° 16, Madrid, 1995.
 - GARRIDO FALLA, Fernando, “Los motivos de impugnación del acto administrativo Nulidad y anulabilidad en derecho administrativo”, en: Revista de Administración pública, N° 17, Madrid, 1995.
 - IVANEGA, Miriam Mabel, “El principio de informalismo en el procedimiento administrativo” en: Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho N° 67, Lima, 2011.
 - JIMÉNEZ MURILLO, Roberto, “Los principios de impulso de oficio y verdad material en el procedimiento administrativo”, en: Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho, N° 67, Lima, 2011.
 - ROJAS FRANCO, Enrique, “El debido procedimiento administrativo”, en: Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho, N° 67, Lima, 2011.
 - SÁNCHEZ POVIS, Lucio Andrés, “la responsabilidad patrimonial de la administración pública en el ordenamiento peruano: Aproximaciones a una

institución pendiente de reforma”, en: Derecho y Sociedad, N° 45, Lima, PUCO, 2016.

- VILLAR EZCURRA, José Luis, “Los acto administrativos de tramite: el acto reiterativo y la indefensión del particular”, en: revista de Administración publica, N° 86, Madrid.

ANEXO